



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Víctor Heberto Cadavid
DEMANDADOS	Porvenir S.A. Cementos Argos S.A.
RADICADO	05-001-31-05- 021-2019-00104
TEMA	Devolución de saldos
DECISIÓN	Revoca sentencia

El dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA y GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **212** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **VÍCTOR HEBERTO CADAVID** contra la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PORVENIR S.A. y CEMENTOS ARGOS S.A.**, con radicado **05-001-31-05-021-2019-00104**.

• **PRETENSIONES:**

Aspira el demandante se declare que con Cementos Argos S.A. existió un contrato de trabajo del 4 de junio de 1986 al 14 de junio de 1991. Como consecuencia, se condene a esta última a pagar los aportes (bono pensional, título pensional) de conformidad con el cálculo actuarial del literal d) del artículo 33 de la ley 100 de 1993 por el periodo mencionado que totaliza 285.85 semanas, incluido los intereses a que haya lugar a satisfacción de la entidad administradora. Asimismo, se condene a Porvenir S.A. a reconocer la devolución de saldos, teniendo en cuenta los periodos mencionados, así como en el municipio de Puerto Nare del 18 de marzo de 1991 al 28 de febrero de 1998 y en el Ministerio de Defensa del 16 de noviembre de 1972 al 30 de

septiembre de 1974. Que se condene a Porvenir S.A. a pagar los intereses moratorios regulados en el artículo 12 del decreto 1748 de 1995, modificado por el artículo 3° del decreto 1474 de 1998, y modificado por artículo 5° del decreto 1513 de 1998 desde la notificación de la presente demanda y hasta la fecha del pago efectivo de la respectiva devolución de saldos. Que se condene a los demandados a la indexación de las condenas.

- **HECHOS:**

Las anteriores pretensiones las fundamenta el demandante en los hechos siguientes: que se encuentra afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por Porvenir S.A. Que laboró para Cementos del Nare S.A., hoy Cementos Argos S.A. del 4 de junio de 1986 al 14 de junio de 1991. Que por tales períodos no se le efectuó afiliación por cuanto para la fecha no era obligatorio. Que laboró al servicio del municipio de Puerto Nare del 18 de marzo de 1991 al 28 de febrero de 1998 y en el Ministerio de Defensa, prestando servicio militar, del 16 de noviembre de 1972 al 30 de septiembre de 1974. Que la AFP pagó el 31 de mayo de 2018 la devolución de saldos por valor de \$18.835.494 sin la inclusión de los periodos mencionados. Que actualmente cuenta con 62 años de edad.

- **CONTESTACIONES:**

Porvenir S.A.: ni se opone ni se allana a la declaratoria de relación laboral entre el demandante y Cementos Argos S.A. Que debe tenerse en cuenta que en caso de que se acceda a declarar la relación laboral que se pretende, Porvenir S.A. recibirá los aportes omitidos por el empleador, mediante cálculo actuarial, y procederá a devolver dichos valores al demandante. Que a este último se le pagó la devolución de saldos, así: *“Por valor de \$18.830.112, el 10 de mayo de 2018, comunicado al demandante el 16 de mayo de 2018, radicado 0208014041862300 (por las cotizaciones y aportes hechos por el actor a PORVENIR S.A., desde septiembre de 1995 hasta septiembre de 2017; Por valor de \$18.224.716, el día 21 de diciembre de 2018, informado al demandante el 26 de diciembre de 2018, radicado 0208014048889200. (por el servicio militar prestado por el demandante al Ministerio de Defensa Nacional entre el 16 de noviembre de 1972 y el 30 de*

septiembre de 1974); Por valor de \$42.523.418, el día 10 de abril de 2019, comunicado al demandante el 22 de abril de 2019, radicado 020801405117700. (por el servicio prestado por el demandante al Municipio de Puerto Nare entre el 18 de marzo de 1991 y el 30 de junio de 1995)” Se opuso a la condena por intereses moratorios. Como excepciones de mérito propuso las que denominó: improcedencia de la acción por carencia de objeto, falta de causa para demandar, inexistencia del derecho, falta de legitimación en la causa por pasiva, hecho exclusivo de un tercero, buena fe de la sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías Porvenir S.A., prescripción, compensación, innominada o genérica.

Cementos Argos S.A.: Se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones al señalar que los extremos de la relación laboral con Cementos del Nare S.A. son del 13 de enero de 1982 al 30 de mayo de 1988. Que para dichos períodos no existía obligación de afiliación a pensión. Como excepciones de mérito propuso las de inexistencia de la obligación, prescripción y compensación.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del 22 de septiembre de 2021, el Juzgado Vigésimoprimer Laboral del Circuito de Medellín condenó a Cementos Argos S.A. a reconocer y pagar al demandante el equivalente a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, por el período laborado a su servicio desde el 13 de enero de 1982 al 30 de marzo de 1988, suma que actualizada a agosto de 2021 asciende a \$4.081.969, la cual deberá ser indexada. Absolvió a Porvenir S.A. de la totalidad de las pretensiones. Condenó en costas a Cementos Argos S.A.

- **APELACIÓN:**

La decisión anterior fue recurrida en apelación por las partes, así:

Demandante: solicita se modifique la sentencia, pues considera que Cementos Argos S.A. no es quien debe pagar la indemnización sustitutiva, toda vez que esta prestación está a cargo de las administradoras del régimen

de prima media. Que en realidad, lo que se busca con este proceso es el pago de la devolución de saldos, la cual está a cargo de Porvenir S.A. Que en el presente caso el empleador debe trasladar el título o cálculo actuarial si la reserva que tiene, en virtud de su aprovisionamiento, trasladar esas sumas a la AFP, sea del régimen de prima medio o de ahorro individual, pues son estas las que reconocen las prestaciones, esto es, Porvenir S.A. En relación a un caso similar, hizo alusión a la sentencia SL3694-2021 de la Corte Suprema de Justicia. Añadió que el cálculo actuarial va nutrido de unos intereses moratorios y unos rendimientos.

Cementos Argos S.A.: solicita la revocatoria de la sentencia, al advertir que no está a su cargo el pago de indemnización sustitutiva. Que para el momento en que existió el vínculo laboral con Cementos del Nare S.A. no se encontraba vigente la ley 100 de 1993, por lo que no le asiste el derecho al reconocimiento de la prestación. Que para el momento en que se prestó el servicio no había obligación de afiliar a los trabajadores a pensión. Añadió que no tampoco le asiste derecho al demandante al pago de la devolución de saldos bajo el pago del cálculo actuarial. Que en caso de acogerse lo solicitado por el actor, no podría condenarse al pago de intereses moratorios o sanción por el no pago, pues no se está ante una entidad morosa. También solicitó la revocatoria de la sentencia en lo relacionado a la imposición de costas procesales.

Porvenir S.A.: solicita la revocatoria de la sentencia y que a su vez se mantenga la decisión frente a las costas procesales frente a la entidad. Indicó que, si bien la sentencia es absolutoria, no resulta favorable a sus intereses. Que la devolución de saldos es un derecho imprescriptible e irrenunciable. Que la liquidación del cálculo actuarial debe realizarse con base en el decreto 1887 de 1994, el cual tendrá inmerso unas situaciones de variabilidad en la rentabilidad de acuerdo a las características propias del RAIS y no unas variables determinadas como lo sería la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, diferencia grande para el afiliado. Pide como consecuencia se ordene la liquidación del cálculo actuarial a cargo de Cementos Argos S.A. a satisfacción de la AFP, para que esta proceda a realizar la devolución de saldos al demandante.

- **ALEGATOS:**

Fueron presentados únicamente por **Porvenir S.A.**, en los siguientes términos:

“De conformidad con lo anterior se tiene que, a todas luces con el fallo de primera instancia se están lesionando derechos y garantías fundamentales del demandante, además se violentó el principio procesal de congruencia, en el entendido de que no se respetó la coexistencia y exclusión entre regímenes pensionales contemplado en el artículo 12 de la Ley 100 de 1993, pues condenó al reconocimiento de una prestación en favor del demandante, bajo parámetros propios del Régimen de Prima Media, cuando el demandante consolidó una situación jurídica pensional en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. En tal sentido lo consecuente era que el juzgador de primera instancia conforme a lo sucedido en dicha diligencia a criterio de esta apoderada, debió haber declarado la existencia de la relación laboral entre el demandante y la empresa demandada, condenado a esta última a reconocer y pagar en favor del actor calculo actuarial, efectuado y recibido a satisfacción por parte de mi representada, adicional a esto debió ordenar la reliquidación por devolución de saldos a la que hubiere lugar a cargo de mi representada y en favor del actor, y no lo resuelto por el mismo, toda vez que con este fallo se está desconociendo el carácter de imprescriptible de los aportes a la seguridad social en pensiones, además de que se resolvió sobre algo que no quedo fijado en el litigio. Es importante reiterar lo expuesto en sede de primera instancia, en cuanto a que el aparato judicial debe garantizar la seguridad jurídica a los intervinientes procesales en este asunto, pues debe precisarse que con el fallo dictado por el juez de primera instancia se esta desconociendo que existen dos regímenes pensionales con sus propias características y requisitos para liquidar las prestaciones establecidas en sistema pensional en favor de los afiliados, razón por la cual resulta improcedente que se condene a reconocer una indemnización sustitutiva en favor del actor, cuando lo correcto, debió ser que al haberse encontrada probada la relación laboral y la omisión de aportes al sistema pensional cuando el actor consolidó su situación pensional en el RAIS administrado por mi representada, condenar a la empresa demandada a pagar calculo actuarial, el cual debe ser liquidado por Porvenir S.A. de conformidad con el Decreto 1887 de 1994, y consecuentemente reliquidar la devolución de saldos realizada al actor desde el año 2018, pues no logró acreditar los requisitos para pensionarse bajo los presupuestos establecidos en el artículo 64 de la Ley 100 de 1993 ni la densidad de cotizaciones para acceder a una garantía de pensión mínima”

CONSIDERACIONES:

Atendiendo a la apelación formulada por las partes, el problema jurídico para resolver por esta Sala del Tribunal se circunscribe en los siguientes temas: *i)* determinar si existe algún tipo de obligación a cargo de Cementos Argos S.A. por los períodos laborados por el demandante del 13 de enero de 1982 al 30 de marzo de 1988; *ii)* devolución de saldos; y, *iii)* costas procesales.

i) Obligación a cargo de Cementos Argos S.A.

No fue objeto de apelación los extremos temporales de la relación laboral que sostuvieron el demandante y Cementos del Nare S.A., hoy Cementos Argos S.A.

Como primer punto a analizar, este Tribunal centrará su estudio en lo correspondiente a la no cotización al sistema de pensiones por su empleador debido a la limitación de la cobertura.

Es necesario comenzar explicando que desde la ley 6ª de 1945 se estableció el primer Estatuto Orgánico del Trabajo, el cual tenía como finalidad reglamentar las relaciones que surgían entre empleadores y trabajadores, las convenciones de trabajo, los conflictos colectivos y la jurisdicción especial.

En su artículo 14 instauró las prestaciones que se encontraban a cargo del empleador, dentro de las cuales estaba la pensión de jubilación. Sin embargo, dicha prestación la asumiría hasta la creación de un Seguro Social, el cual sustituiría al empleador y se apropiaría de los riesgos de vejez, invalidez y muerte.

Con la expedición de la ley 90 de 1946 se creó el Seguro Social obligatorio para todos los individuos, nacionales y extranjeros que prestaran sus servicios a otra persona en virtud de un contrato expreso o presunto de trabajo o aprendizaje e instituyó para su manejo el Instituto Colombiano de Seguros Sociales.

El artículo 72 de la anterior ley expuso: *“Las prestaciones reglamentadas en esta ley, que venían causándose en virtud de disposiciones anteriores a cargo de los patronos, se seguirán rigiendo por tales disposiciones hasta la fecha en que el seguro social las vaya asumiendo por haberse cumplido el aporte previo señalado para cada*

caso. Desde esa fecha empezarán a hacerse efectivos los servicios aquí establecidos, y dejarán de aplicarse aquellas disposiciones anteriores”.

De igual forma, el artículo 1º del decreto 3041 de 1966 o Reglamento General de los Seguros de invalidez, vejez y muerte, en desarrollo de la Ley 90 de 1946 y con fundamento en la norma que se acaba de citar, ordenó la afiliación de los trabajadores a dicho régimen, pero no lo hizo para todas las poblaciones del país a un mismo tiempo, pues en algunas de ellas llamó a afiliación obligatoria con posterioridad a esa fecha, e incluso en otros casos, nunca realizó tal llamamiento hasta la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993.

De tal suerte que en aquellas zonas en las cuales no se hizo efectiva la afiliación obligatoria de los trabajadores al ISS, continuaba rigiendo la regla anterior conforme a la cual era el empleador el directo responsable del reconocimiento de las respectivas pensiones, siempre que se reunieran los requisitos exigidos en el sistema del código, que para el evento de la jubilación, consistían en el cumplimiento de 20 años continuos o discontinuos al servicio de ese empleador y 60 años de edad en el caso de los hombres o 55 en el de las mujeres.

Respecto a lo anterior, debe señalarse que es claro que Cementos del Nare S.A., hoy Cementos Argos S.A. omitió la afiliación al sistema pensional, y por ende, la realización de aportes, presentado como justificación la no obligatoriedad jurídica de hacerlo dada la restricción de la cobertura en la zona geográfica donde aquel prestaba el servicio.

Frente a tal omisión de aportes por no existir afiliación, es ineludible traer el mecanismo del título pensional, debiendo entender éste como aquel cálculo actuarial que están obligados a trasladar a las AFP las empresas o empleadores del sector privado que, con anterioridad a la vigencia del Sistema General de Pensiones establecido en la ley 100 de 1993, efectuaban directamente el reconocimiento y pago de pensiones.

La Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 24 de septiembre del 2014 radicado 45107, señaló que la obligación del empleador de pagar el cálculo actuarial por el período laborado antes de que se suscitara la obligación de afiliar al trabajador al sistema general de

pensiones, no surge como la imposición de una sanción por un incumplimiento, sino en virtud de la aplicación de principios y valores superiores, dado que no puede “...imponérsele al trabajador una carga que afecte su derecho a la pensión, sea porque se desconocieron esos períodos, ora porque el tránsito legislativo en vez de garantizarle el acceso a la prestación, como se lo propuso el nuevo esquema, se le frustre ese mismo derecho.”

Dicha Corte reiteró el criterio pacífico que ha regido en tal corporación, al señalar que es viable y necesario que los tiempos trabajados y no cotizados, por la ausencia de cobertura del sistema general de pensiones, que no por incumplimiento empresarial, fueran habilitados a través de títulos pensionales a cargo del empleador, a efectos de que el trabajador completara la densidad de cotizaciones exigida por la Ley. Así se pronunció en sentencia SL2263-2022:

“Así pues, el criterio que se viene exponiendo es el que marca el derrotero a seguirse actualmente (CSJ SL313-2022, entre muchas otras), en lo que se refiere a la interpretación y aplicación de las normas relativas al tema contenidas en la Ley 90 de 1946 y los reglamentos posteriores expedidos por el extinto Instituto de Seguros Sociales, tal como se recordó, también, en la sentencia CSJ SL2879-2020:

La jurisprudencia de esta Sala, de manera reiterada y pacífica ha adocinado que el empleador que no afilie a su trabajador al sistema de seguridad social, incluso debido a la falta de cobertura del ISS debe responder por las obligaciones pensionales frente a sus trabajadores (CSJ SL5790-2014, CSJ SL4072-2017 y SL14215-2017), máxime cuando se trata de períodos en que aquellas estaban a su cargo (CSJ SL17300-2014, CSJ SL4072-2017, CSJ SL10122-2017, CSJ SL5541-2018 y CSJ SL3547-2018) y, por tanto, deben asumir el título pensional correspondiente a efectos del reconocimiento de la pensión de vejez (CSJ SL9856-2014, CSJ SL17300-2014, CSJ SL14388-2015, CSJ SL10122-2017, CSJ SL15511-2017, CSJ SL068-2018, CSJ SL1356-2019, CSJ SL1342-2019 y CSJ SL1140-2020).

Ello es así, porque el pago del mencionado título a la entidad de seguridad social a la cual se encuentra afiliado el trabajador, tiene por finalidad cubrir esos períodos no cotizados e integrar el capital que se requiere para el reconocimiento de la prestación de vejez, es decir, su único objetivo es que se perfeccione la subrogación de un riesgo que anteriormente asumía el empleador.

[...]

Lo anterior no implica la imposición de una obligación por fuera de la ley. Por el contrario, busca garantizar el derecho fundamental a la seguridad social de los trabajadores que no pueden verse perjudicados por la falta de cobertura del ISS, especialmente tratándose de períodos inequívocamente laborados y que, como tales, deben tenerse en cuenta para efectos pensionales. (Subrayas de la Sala)”

En este mismo sentido ya se había pronunciado la Corte Constitucional en sentencia T-770 de 2013, en la que expresó:

“...la fórmula que mejor armoniza y salvaguarda los derechos de la clase trabajadora ante la entrada en funcionamiento progresiva y difusa del Instituto de Seguros Sociales, es la responsabilidad de los empleadores de sufragar el título o bono pensional por el número de semanas efectivamente laboradas para una misma empresa, atendiendo el deber de aprovisionamiento dispuesto legalmente.”

Al precedente citado, cabe agregar la sentencia T-714 de 2015, en la que la Corte Constitucional diferenció entre dos cargas del empleador: (i) la consagrada en el artículo 72 de la Ley 90 de 1946 consistente en efectuar los aprovisionamientos de capital necesario para la realizar el aporte previo al sistema de seguro social en el momento en que el Instituto de Seguros Sociales asumiera la obligación y (ii) la de efectuar la afiliación al ISS cuando se realizara el llamado correspondiente.

Debe decirse, que actualmente el criterio de la Corte Suprema de Justicia se ratifica en el sentido de indicar que independientemente de si la afiliación al ISS no se efectuó, por omisión del empleador o porque no existir cobertura, es obligación del empleador pagar mediante cálculo actuarial los períodos durante los cuales el trabajador estuvo laborando a su servicio.

Aplicando lo dicho al presente caso, se puede concluir que es procedente ordenar el cálculo actuarial pretendido a cargo de Cementos Argos S.A., por el período comprendido del 13 de enero de 1982 al 30 de marzo de 1988. Debiéndose en consecuencia **REVOCAR** la sentencia en tal sentido.

Conforme al certificado¹ expedido por Cementos Argos S.A., los salario a tener en cuenta para efectos del cálculo actuarial serán los siguientes:

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Enero	\$6.086	\$13.890	\$17.520	\$21.784	\$26.794	\$32.010	\$39.543
Febrero	\$10.740	\$13.890	\$17.520	\$21.784	\$26.794	\$32.010	\$39.543
Marzo	\$10.740	\$13.890	\$17.520	\$21.784	\$26.794	\$32.010	\$39.543
Abril	\$10.740	\$13.890	\$17.520	\$21.784	\$26.794	\$32.010	
Mayo	\$10.740	\$13.890	\$17.520	\$21.784	\$26.794	\$32.010	
Junio	\$10.740	\$13.890	\$17.520	\$21.784	\$26.794	\$32.010	

¹ PDF “23CertificadoSalariosDemandante(2)”

Julio	\$10.740	\$13.890	\$17.520	\$21.784	\$26.794	\$32.010	
Agosto	\$10.740	\$13.890	\$17.520	\$21.784	\$26.794	\$32.010	
Septiembre	\$10.740	\$13.890	\$17.520	\$21.784	\$26.794	\$32.010	
Octubre	\$10.740	\$13.890	\$17.520	\$21.784	\$26.794	\$32.010	
Noviembre	\$10.740	\$13.890	\$17.520	\$21.784	\$26.794	\$32.010	
Diciembre	\$10.740	\$13.890	\$17.520	\$21.784	\$26.794	\$32.010	

Como consecuencia de lo anterior, se le **ORDENARÁ** a Porvenir S.A. que en un término no superior a un mes contado a partir de la ejecutoria de la sentencia deberá realizar el cálculo actuarial a cargo de Cementos Argos S.A., teniendo en cuenta las fechas declaradas en primera instancia, esto es, del 13 de enero de 1982 al 30 de marzo de 1988, y los salarios mencionados.

Asimismo, se le **ORDENARÁ** a Cementos Argos S.A. que una vez reciba por parte de Porvenir S.A. dicho cálculo, deberá en un plazo no superior a un mes cancelar el título pensional correspondiente.

ii) Devolución de saldos

Esta Sala no comparte la decisión tomada por el juzgado del conocimiento de ordenarle a Cementos Argos S.A. el pago del equivalente a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, debido a que, como se indicó con anterioridad, tal empresa tiene a su cargo el pago del cálculo actuarial por el período en que el demandante prestó los servicio en su favor. Una vez se reciba a satisfacción de la AFP el pago del cálculo actuarial, estos valores ingresarán a la cuenta de ahorro individual del demandante.

Respecto a la devolución de saldos, estableció el artículo 66 de la ley 100 de 1993 *“Quienes a las edades previstas en el artículo anterior no hayan cotizado el número mínimo de semanas exigidas, y no hayan acumulado el capital necesario para financiar una pensión por lo menos igual al salario mínimo, tendrán derecho a la devolución del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, si a éste hubiere lugar, o a continuar cotizando hasta alcanzar el derecho”*

En el caso de autos se presenta que al accionante le fue pagado por parte de Porvenir S.A. la devolución de saldos, en el que se incluyeron los períodos

cotizaciones desde septiembre de 1995 hasta septiembre de 2017 por espacio de 128 semanas; el período en que prestó servicio militar en favor del Ministerio de Defensa Nacional entre el 16 de noviembre de 1972 y el 30 de septiembre de 1974; y por haber laborado al municipio de Puerto Nare entre el 18 de marzo de 1991 y el 30 de junio de 1995.

De lo anterior se desprende que, está a cargo de Porvenir S.A. el pago de la devolución de saldos, en el que se incluya dentro del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual del demandante lo concerniente al pago efectuado por Cementos Argos S.A.

Así las cosas, se **REVOCARÁ** la sentencia, para en su lugar ordenarle a Porvenir S.A. que una vez reciba a satisfacción el pago del cálculo actuarial proveniente de Cementos Argos S.A., le pague al demandante la reliquidación de la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de la ley 100 de 1993.

iii) Costas procesales

Las costas procesales de la primera instancia quedan como lo dijo el juzgado del conocimiento. Las de la segunda instancia, atendiendo a lo establecido en el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso y por no salir avante la apelación formulada por Cementos Argos S.A., también son de su cargo y en favor del demandante. De conformidad con lo establecido en el acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de \$1.000.000.

Con los argumentos anteriores y atendiendo al principio de consonancia de que trata el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas por Porvenir S.A.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE:

PRIMERO: Se **REVOCAN** los numerales primero al tercero de la parte resolutive de la sentencia que se revisa por vía de apelación.

SEGUNDO: Se **CONDENA** a **CEMENTOS ARGOS S.A.**, a cancelar el cálculo actuarial por los períodos comprendidos del 13 de enero de 1982 al 30 de marzo de 1988, teniendo en cuenta como IBC los salarios mencionados en la motivación de esta providencia.

TERCERO: Se **ORDENA** a **PORVENIR S.A.** que en un término no superior a un mes liquide el título pensional a cargo **CEMENTOS ARGOS S.A.** teniendo en cuenta las fechas y salarios señaladas en el numeral anterior. Como consecuencia, se **CONDENA** a **CEMENTOS ARGOS S.A.** a que, una vez reciba por parte de **PORVENIR S.A.** la liquidación anterior, proceda en un plazo no superior a un mes a cancelar el título pensional correspondiente.

CUARTO: Se **CONDENA** a **PORVENIR S.A.** a que una vez reciba a satisfacción el pago del cálculo actuarial proveniente de Cementos Argos S.A., le pague al demandante la reliquidación de la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de la ley 100 de 1993.

QUINTO: Las costas procesales y agencias en derecho de la segunda instancia quedan como se dijo en la motivación de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **EDICTO**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,


GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA


HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Víctor Heberto Cadavid
DEMANDADOS	Porvenir S.A. Cementos Argos S.A.
RADICADO	05-001-31-05- 021-2019-00104
DECISIÓN	Revoca sentencia
MAGISTRADO PONENTE	Guillermo Cardona Martínez

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/131> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 19 de agosto de 2022 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 19 de agosto de 2022 a la 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO